

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 13, capítulo CCXCVIII

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
Jaime Olveda

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 13, capítulo CCXCVIII

**Revisado por
Jaime Olveda
(El Colegio de Jalisco)**

Capítulo CCXCVIII

Grave crisis política en Querétaro

Marzo a octubre de 1869

CAPÍTULO CCXCVIII

GRAVE CRISIS POLÍTICA EN QUERÉTARO

Marzo a octubre de 1869

Por considerarla importante en sí, pero al mismo tiempo representativa de la actitud de los políticos de la época tanto de provincia, como de la capital, presentaremos la grave crisis política que sufrió el estado de Querétaro y que, de paso, puso en difícil situación al gobierno federal, que deseaba mantener una posición neutral y no recurrir a las fuerzas federales como instrumento para dar fin al conflicto.

El gobernador de Querétaro, coronel Julio Cervantes, inició su pública tirantez de relaciones con la Legislatura local en marzo, al devolver con observaciones un decreto para reorganizar la administración de justicia. El vicegobernador Benito Zenca inconforme con lo ocurrido renunció, así como algunos otros funcionarios, lo que motivó el nombramiento de varias personas para llenar las vacantes.¹

La Legislatura dividida por pugnas internas, no puede iniciar su período de sesiones, pero ello no impide que, sin esperar la elección popular, la diputación permanente designe, en el curso de abril, algunos funcionarios judiciales con carácter provisional.²

Finalmente, el 28 de abril, el diputado Próspero Vega acusa ante el Congreso al gobernador Cervantes de lo siguiente: "nombramiento de empleados que no son del estado, nombramiento de empleados sin las ternas de la junta respectiva, descuido en la recta administración de justicia, descuido en la recaudación de las rentas, por no haber exigido

¹ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 1º de abril de 1869.

² *El Siglo Diez y Nueve*, México, 8 de mayo de 1869.

fianzas a los empleados, desigualdad en los pagos y usurpación de atribuciones del Poder Judicial".³

Numeroso conjunto de personas, en tumultuosa manifestación, forzó a que algunos diputados se reunieran y dictaminaran rechazar la acusación.

Pocos días después fue asaltado y apaleado el diputado Domínguez; el secretario de Gobierno lo visitó para ofrecerle garantías; pero no obstante el empeño del gobierno, no se pudo localizar a sus agresores.

Siete diputados, de los doce que integraban la Legislatura de Querétaro, solicitaron del Congreso de la Unión ayuda para hacerse respetar. El Congreso, en sesión secreta del 8 de mayo, en resolución "económica" resolvió apoyar a la Legislatura de Querétaro.

El ministro de Guerra designa al Gral. Paz como jefe de las tropas encargadas de cuidar el orden en Querétaro.

El Presidente de la Legislatura, Juan D. Acosta, convoca a los diputados, pero no es posible se reúnan, pretextando diversos motivos.

Intempestivamente la Legislatura declara culpable al gobernador Cervantes, quien se apresura a lanzar un manifiesto desconociendo a la Legislatura, la que se declaró en sesión permanente, habiendo nombrado a Mariano Vázquez como gobernador interino.

El 31 de mayo, en sesión secreta del Congreso de la Unión, la diputación federal queretana logró que, con dispensa de trámites, se aprobara un acuerdo disponiendo que el Ejecutivo prevenga a las fuerzas federales para que hagan cumplir el veredicto del Gran Jurado, que declara culpable y destituye al gobernador Cervantes.⁴

El coronel Cervantes se niega a acatar la decisión de la Legislatura; llega a Querétaro el diputado federal Doria con el propósito de mediar en el conflicto, no logrando un buen resultado.

El gobernador solicita amparo y lo obtiene del juez de distrito, solicitando amparo contra los acuerdos económicos del Congreso de la

³ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 12 de mayo de 1869.

⁴ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 1º de junio de 1869.

Unión de 8 y 31 de mayo; es más, el juez manda suspender toda providencia que pueda dictar el Gral. Paz para apoyar el acuerdo del Congreso.⁵

La situación continúa tensa en Querétaro; se discute acaloradamente que el amparo se presentó y fue otorgado por el tercer suplente de juez, lo que se considera irregular. Cervantes prosigue actuando y designa al abogado Ignacio L. Vallarta para que lo represente ante la Suprema Corte de Justicia como su defensor, toda vez que la Legislatura pidió la revisión del amparo concedido.

Mientras tanto los incidentes continúan en Querétaro, pues el juez de distrito ordenó a la fuerza federal aprehendiera a algunos de los diputados que se habían instalado en el edificio del Congreso.

Al día siguiente el ministro de Guerra hizo saber que el Presidente no aprobaba lo ejecutado; ordenó al Gral. Francisco Paz que la fuerza federal protegiera y regresara al recinto de la Legislatura a las personas que estaban ahí y habían sido aprehendidas.⁶

La Suprema Corte de Justicia resolvió revocar el 4 de agosto la sentencia del juez de distrito relativa a la concesión del amparo, lo que motivó que el procurador de justicia, León Guzmán, presentara a ese Tribunal un largo estudio mostrando su inconformidad con la resolución.⁷

El representante del gobernador Cervantes, Ignacio L. Vallarta, presentó a la Suprema Corte el 11 de agosto un interesante alegato, con el que se inicia este capítulo, señalando que se ha planteado un conflicto en la jurisdicción de los poderes por los acuerdos tomados por el Congreso, al resolver el uso de la fuerza, invadiendo las funciones del Ejecutivo, por lo que es necesaria la intervención de ese tribunal; concluye que se mande suspender los acuerdos de 8 y 31 de mayo del Congreso de la Unión.⁸

León Guzmán presenta ante la Corte su pedimento y, reconociendo la personalidad de Vallarta como representante del gobierno

⁵ *El Siglo diez y nueve*. Periódico. México, 18 de junio de 1869.

⁶ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 10 de agosto de 1869, p.3.

⁷ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 5 de agosto de 1869, p.1.

⁸ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 18 de agosto de 1869. p.1.

constitucional de Querétaro, señala que "los términos en que está concebido el libelo de demanda no son conformes a los preceptos constitucionales, pues la controversia sólo puede versar sobre el cumplimiento y ejecución de los acuerdos del 8 y 31 de mayo y de ninguna manera sobre la constitucionalidad o validez de dichos acuerdos".⁹ No se llegó a tomar decisión sobre el planteamiento de Vallarta. El Congreso de la Unión reanudó sus sesiones el 16 de septiembre, y a los pocos días la Legislatura de Querétaro ocurrió en queja contra el gobernador Cervantes. Se dio entrada a ella y se turnó a la sección del Gran Jurado, citándose para el 16 de octubre para tomar decisión.

Vallarta fue designado por el gobernador Cervantes como su defensor, quien actuó con gran diligencia, no sólo ante el Congreso sino también haciendo uso de la prensa.

Procurándose que Cervantes perdiera la simpatía del gobierno federal, se divulgó la noticia de que Miguel Negrete, el contumaz sublevado, había sostenido conferencias con el gobernador de Querétaro. El 1º de octubre, el coronel Cervantes se apresura a desmentir tal versión, ratificando su lealtad a Juárez y asegurando su respeto y sumisión a la ley.

Erigido el Congreso en Gran Jurado, el 16 de octubre resolvió declarar culpable al coronel Cervantes, después de agitado debate en que participaron destacadamente el diputado Ezequiel Montes e Ignacio L. Vallarta. Por 77 votos contra 55, se tomó esa decisión.¹⁰

Unos cuantos días después, Cervantes se dirige a Juárez para desvirtuar el rumor de que pretende sublevarse; está conforme con que se declare el estado de sitio en Querétaro y que el Ejecutivo federal designe un gobernador interino; pide que se le "evite tener que entregar el mando a mis enemigos políticos".

Ese mismo día, 24 de octubre, Cervantes agradece las expresiones de aliento que Juárez le envía por conducto del Sr. Acosta y le ratifica su

⁹ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 29 de agosto de 1869.

¹⁰ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 17, 18, 19 de octubre de 1869.

decisión de que no será factor de problemas que alteren la paz. Sin embargo, se niega a entregar el cargo pretextando que no hay vicegobernador y resistiéndose a reconocer a Mariano Vázquez, a quien la Legislatura designó como gobernador.

El Congreso llama el 5 de noviembre al ministro de Gobernación para que explique por qué no se cumplió la decisión de que Cervantes quedara separado del cargo y se presentara en la ciudad de México a disposición de la Suprema Corte.¹¹

Al día siguiente, el ministro precisa la posición de Juárez y declara que el Ejecutivo considera que el Congreso se excedió, pues resoluciones como la que tomó sólo "se refieren a la organización o régimen interior del Congreso mismo, y que sobre este punto, y para que se defina con exactitud lo que es materia de ley o de acuerdo económico, se propone dirigir al Congreso la correspondiente iniciativa".¹²

Cervantes había designado, desde el mes anterior, a Ángel Dueñas como prefecto del centro y resuelve entregarle el gobierno como interino.

El 24 de noviembre se examina en la Corte el caso del gobernador Cervantes y lo condena a sufrir la pena de suspensión de su empleo de gobernador y los sueldos correspondientes, durante un año. Por considerar esta sentencia digna de estudio, se reproduce en este capítulo.

Lamentablemente esta controversia no termina con la decisión de la Corte y en capítulos siguientes seguiremos los posteriores sucesos, derivados de la negativa de Dueñas a entregar el cargo de gobernador.

El gobernador de Oaxaca fue también acusado ante el Congreso, el 12 de enero de 1869, por Antonio Méndez, Lauro J. Prieto y Sánchez, Procopio Arenas y José María Méndez.

Erigido el Congreso en Gran Jurado, el 2 de diciembre la sección dictaminadora propone se le absuelva. Después de algunos discursos, en que se elogió a Díaz, fue absuelto por unanimidad.¹³

¹¹ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 6 de noviembre de 1869, p.1.

¹² *El Siglo Diez y Nueve*, México, 7 de noviembre de 1869, p.1.

¹³ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 3 de diciembre de 1869, p.1.

VALLARTA PLANTEA LA CONTROVERSIA ENTRE LOS GOBIERNOS DE QUERÉTARO Y FEDERAL

Ciudadanos ministros de la sala en turno de la Suprema Corte de Justicia de la nación:

Ignacio L. Vallarta, en representación del ciudadano Julio María Cervantes, gobernador constitucional del estado de Querétaro, según lo acredita el poder que exhibo, ante esa sala como mejor proceda, y salvas las protestas oportunas, expongo:

Es un hecho que ha entrado ya al dominio público, que la Suprema Corte de Justicia se ha servido revocar la sentencia que el juez de distrito de Querétaro pronunció amparando al gobernador de ese estado contra los acuerdos del Congreso de la Unión de 8 y 31 de mayo próximo pasado. Respetando, como debo, esa última resolución del Supremo Tribunal de la federación, el deber que he contraído, aceptando el poder que me ha conferido ese gobernador, las apremiantes instrucciones que de su parte he recibido y, no debo ocultarlo, mi vehemente deseo de que la democracia y la federación sean entre nosotros algo más que palabras lisonjeras de felicidad para nuestra trabajada sociedad, todo eso, repito, me obliga a venir ahora ante esta Sala, introduciendo un nuevo recurso constitucional que salve la independencia y soberanía, no de Querétaro solamente, sino de todos los estados de la confederación nacional, amagados de muerte por aquellos acuerdos del Congreso de la Unión.

Grave y delicadísima es la actual cuestión, cualquiera que sea el aspecto bajo el que se la mire; importante en la actualidad, porque de su solución está pendiente la paz pública de un estado; trascendental para el porvenir, porque hoy va a saber el país si la independencia de los estados, prometida por la Constitución, es una verdad, o si la tiranía de una mayoría legislativa, mal informada en una hora de precipitación, puede

acordar lo que la Constitución no quiere que se haga nunca; importante y trascendental, repito, esta delicada cuestión, es en igual grado difícil, ya por la falta de leyes orgánicas del precepto de la Constitución, ya por la carencia de toda clase de precedentes en nuestra jurisprudencia constitucional, ya, en fin, por la completa novedad de las materias que van a discutirse. Sin crearme, ni con mucho, capaz de tratar las cuestiones que este juicio entraña, sí entro al debate lleno de confianza en el patriotismo ilustrado, en la alta justificación de esta Sala, para esperar que su resolución tranquilice los ánimos inquietos en Querétaro, aseguren la confianza en los amigos de la federación, disipando todo temor de que el Poder de la Unión pueda atentar contra ella, cimenten la paz en la observancia de la ley y enseñen, por fin, que en México ha pasado para siempre la época, no sólo de los motines militares, sino de toda tiranía, aunque ella se ejerza por el parlamento y en nombre de una mayoría.

No es mi ánimo, ni tengo hoy tiempo para ello, de fundar con toda extensión la controversia que en nombre del ciudadano gobernador de Querétaro, y fundado en el artículo 98 de la Constitución, vengo a promover contra la Unión. Ocasión más oportuna se me presentará después, para llenar este deber mío; por ahora, para iniciar esa controversia tan violentamente, como apremiantes circunstancias lo exigen, me bastará expresar, siquiera sea en compendio, los fundamentos del recurso de que uso.

Nadie que por prevención no escuche la razón, puede poner en duda que los acuerdos de 8 y, sobre todo, de 31 de mayo último, son notoriamente contrarios al artículo 116 de la Constitución. Sin recordar lo que en Querétaro pasó durante ese mes de mayo, sin registrar la ley constitucional de ese estado para juzgar de la legitimidad de la llamada Legislatura, es un hecho reciente, que todos sabemos, que la prensa del país ha censurado, el que el Congreso de la Unión, con verdadera festinación, y desoyendo la voz autorizada del órgano del Poder Ejecutivo, mandó que la fuerza federal fuera a intervenir, a ingerirse en los asuntos interiores de Querétaro, cuando es de evidente notoriedad que en ese estado ni ha habido ni hay, "ni invasión o violencia exterior, ni sublevación ni trastorno interior". No se necesitan muchas

demostraciones ni para poner en evidencia esos hechos, ni para acreditar que el Congreso de la Unión ha violado aquel artículo 116, ordenando tan afanosamente que las bayonetas fuesen a dar a una situación difícil una solución que sólo se puede encontrar en el respeto inviolable de la ley, que regulariza y determina las funciones de los poderes públicos de Querétaro. Ofrezco, sin embargo, entrar después de esas demostraciones, hasta hacer imposible toda duda sobre mis asertos, hasta evidenciar que quien siempre debiera ser el celoso guardián de nuestras instituciones, el Congreso de la Unión, ha rasgado en este caso la ley constitucional. ¡Deber penoso para quien no sólo respeta la autoridad, sino que desea que ella esté siempre rodeada de prestigio! Ese deber lo llenaré en términos de defensa, tal cual a mi profesión cumple.

Es una máxima de nuestro derecho constitucional, que toca al Poder Judicial de la Federación, ser el supremo regulador del orden constitucional establecido, hasta impidiendo que los poderes públicos traslimiten sus atribuciones con violación de la ley suprema de la Unión; y para no hablar sino de materias que con las de este juicio se conexionan, es una máxima de nuestro derecho constitucional que corresponde a aquel Poder Judicial fallar en último extremo sobre la constitucionalidad de las leyes, impidiendo así que la tiranía de las mayorías parlamentarias rasguen a su antojo la ley fundamental y precipiten al país en la senda revolucionaria. La Suprema Corte de Justicia, que amparando garantías individuales puede declarar anti-constitucional una ley para proteger a un individuo, tiene, debe tener por más apremiantes consideraciones al mismo supremo poder cuando se trata de amparar los intereses políticos de un estado, de garantizar la inviolabilidad de nuestras instituciones, de proteger las garantías públicas, políticas de todo el orden constitucional. Verdades serán éstas que también después cumplidamente probaré.

Cuando la Unión rompe el lazo de alianza que con los Estados la liga, en esa infracción constitucional, ella, por el mismo hecho, se constituye parte en una controversia ante el tribunal que debe en razón decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, si no se quiere que tal controversia degenera en combate, que

en el campo de batalla dé la victoria al más fuerte. La Constitución de la República, que quiso ahogar en su cuna el espíritu revolucionario, que quiso que la ley y no la fuerza dirimieran los conflictos entre el poder de la Unión y el poder de los estados, facultó al Poder Judicial federal para que fallara, desde la primera instancia, las controversias "en que la Unión fuere parte". El estado de Querétaro, agraviado en su independencia por el acuerdo de 31 de mayo, está en su perfecto derecho para traer ante este tribunal a "la Unión", sosteniendo él por su parte que no cumplirá una ley, un acuerdo anticonstitucional, y pidiendo al Tribunal que declare nulo y de ningún valor ese acuerdo.

El gobernador de un estado, en su calidad oficial, es su representante legítimo para venir a litigar defendiendo los intereses políticos de ese estado. Si nuestra ley carece de un precepto terminante que esa doctrina funde, me anticiparé a mis posteriores demostraciones, diciendo que esa doctrina está sin contradicción aceptada por los publicistas que han escrito a la luz de una ley constitucional igual a la nuestra. "A suit, dice Kent, by or against the governor of state in this official capacity is a suit by or against the state in the meaning of the constitution." Anticipo estas indicaciones para fundar desde ahora el recurso que entablo.

Las breves consideraciones que dejo expuestas y las demás razones que prometo en tiempo alegar me hacen concluir pidiendo a la Sala, en nombre del ciudadano gobernador constitucional del estado de Querétaro, que siendo el caso presente una controversia entre ese estado y la Unión, sobre la constitucionalidad de los acuerdos del Congreso del 8 y 31 de mayo próximo pasado se sirva, sustanciándola conforme al artículo 98 de la Constitución, resolver que son anticonstitucionales esos acuerdos y, como tales, nulos y de ningún valor, según lo previene la misma Constitución en su artículo 126.

México, agosto 6 de 1869.

VALLARTA PIDE SE DEJEN TEMPORALMENTE EN SUSPENSO LOS ACUERDOS DEL CONGRESO

Ciudadanos ministros de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia:

Ignacio L. Vallarta, en representación del ciudadano gobernador Constitucional del estado de Querétaro, según lo tengo ya acreditado en la controversia que he promovido, sosteniendo la independencia de ese estado, atacada por los acuerdos del Congreso de la Unión, de 8 y 31 de mayo próximo pasado, ante esa Sala, con los respetos debidos, y salvas las protestas convenientes, expongo:

Al iniciar aquella controversia, en escrito de 6 del corriente, expresé muy someramente los fundamentos legales que la apoyan, indicando apenas las gravísimas cuestiones de derecho público que con esa controversia se rozan, y de cuya solución está pendiente, no ya la paz de un estado, sino el prestigio, la consolidación de las instituciones que nos rigen. Aunque las indicaciones que entonces hice son bastantes para poner fuera de duda la procedencia constitucional de la actual controversia, no expendí, ni con mucho, todas las razones que evidencian la justicia que asiste en su demanda al estado de Querétaro, por quien tengo la honra de abogar. Ni ha llegado aun la ocasión de hacer brillar esa justicia en todo su esplendor, ni el cortísimo tiempo de que puedo disponer para presentar mi demanda, me permitió hacer más que aquellas breves indicaciones sobre las muchas y difíciles cuestiones que en este juicio, por la primera vez entre nosotros, se van a discutir.

Hoy tengo ya el imperioso deber de afrontar una de esas cuestiones, capital en este asunto, y cuya solución no puede emplazarse ni un instante más sin nulificar desde ahora la sentencia en sus efectos, sin prejuzgar el éxito definitivo mismo de esta controversia. La naturaleza de esa cuestión está revelando, no ya su interés trascendental,

sino, lo que es más, la necesidad de su inmediata resolución previa a cualquiera otro trámite del juicio. Hablo de la necesaria e indeclinable suspensión de la ejecución de los acuerdos de 8 y 31 de mayo; sin esa suspensión este juicio sería del todo inútil y su gravísima importancia constitucional desaparecería por completo, no quedando en su lugar más que una burla para el estado agraviado, un sarcasmo para el tribunal que de él siguiera conociendo. Voy a esforzarme en probar que, antes de todo trámite, se debe decretar aquella suspensión que vengo hoy a pedir.

Nadie extrañará que, para fundar esa petición, no cite en el texto de la ley que terminantemente lo ordene, ni la práctica de los tribunales, que aplicándola, ministre precedentes que hoy se pudieran invocar, ni la doctrina de los comentadores que interpretando la ley misma enseñan esa suspensión. Por una desgracia nunca bastante sentida, ni existe la ley orgánica del artículo 98 de la Constitución, ni los tribunales han fallado jamás entre nosotros una controversia de la naturaleza de la presente, ni nuestra jurisprudencia constitucional ha podido aún escribir sus primeras páginas, cuando la fuerza hasta ahora y no la ley ha sido la suprema razón en todas las cuestiones políticas. Pero si esto es así, y ello constituye una de las serias dificultades de este negocio, también es indisputable que este juicio, que abre una nueva era en nuestra política interior, rindiendo homenaje a la suprema ley del país, no puede quedar sin fallo, porque falte la ley orgánica, o las ejecutorias, o las doctrinas. Sería un precedente de fatales pronósticos para la paz de la República, no ahogar en su cuna la revolución, no convertir al pronunciamiento en controversia, como lo quiere la Constitución, por que falten las leyes orgánicas, su jurisprudencia constitucional, cuando éstas no existen precisamente porque la revolución ha impedido hasta hoy la consolidación de las instituciones políticas de la República. Sin leyes orgánicas, sin precedentes y sin doctrinas nacionales, el abogado en esta causa debe luchar para que por fin el precepto constitucional sea una letra viva; y esta sala, en cumplimiento de los deberes más graves que sobre el primer tribunal de la nación pesan, ha de apresurarse a cerrar la puerta al motín, abriendo de par en par las que conducen a la aplicación de la ley en los delicados conflictos que entre los poderes públicos suelen surgir.

Necesidad tenía de consignar lo que dejé dicho, antes de ir al fondo de la cuestión que promuevo, para que no se interprete en mal sentido, para la causa porque abogo, la falta de citas de autoridades más o menos respetables que funden mis pretensiones; no existiendo esas autoridades, procuro inspirarme en la razón, en la justicia, en la filosofía del texto constitucional para sostener mi petición.

He comenzado asegurando, sin ambages, que la suspensión de la ejecución de los acuerdos de 8 y 31 de mayo es necesaria e indeclinable, y esto en tanto grado, que sin ella este juicio muere antes de nacer, esta controversia desaparece, no porque la ley la resuelva, sino porque la fuerza de las armas le da fin. Pocas y sencillísimas reflexiones ponen en alto relieve esos importantísimos asertos. Ejecutado el acuerdo de 31 de mayo, sobre todo, la fuerza federal que existe en Querétaro tiene que ponerse a disposición del gobernador nombrado ilegalmente por la llamada Legislatura, hacer efectivas sus órdenes, cumplir el titulado veredicto y, en consecuencia, arrancar el Poder Ejecutivo al ciudadano Julio María Cervantes. Y hacer todo esto, es prejuzgar esta controversia antes de estar sustanciada. En el instante mismo en que el gobernador constitucional, por quien yo abogo, deje de serlo, acaba su personalidad en este juicio, porque no es ya el legítimo, el oficial representante del estado de Querétaro, y absurdo sería sin parte legítima proseguir el juicio. El gobernador nombrado por la llamada Legislatura bien se cuidaría de no apersonarse en él para sostener la inconstitucionalidad de la intervención que Querétaro está sufriendo; la Legislatura, que tampoco lo haría y que nunca sería parte en este juicio, aunque quisiera serlo, lo mismo que no lo es la minoría disensiente de ella, no se podrían llamar a continuar la controversia. Y como menos pueden representar al estado, ante los tribunales federales, ni el Poder Judicial de Querétaro, ni sus autoridades administrativas inferiores, ni sus simples ciudadanos, consecuencia necesaria, indeclinable, de la no suspensión de los acuerdos del Congreso, sería que esta controversia fuera imposible, imposible, la aplicación del artículo 98 de la Constitución. No se alcanzaría el objeto de la ley, se la infringiría con deliberado propósito, si al comenzar la controversia se despojase, al que la promueve, de la personalidad oficial

que necesita para proseguirla. Esta argumentación, estas consideraciones que con todas sus fuerzas apoya la filosofía del artículo 98 de la Constitución, valen cuanto valer pudiera la ley orgánica que ordenara terminantemente la suspensión de la ejecución del acuerdo de inconstitucional acusado.

A esas razones de apremiante peso se pueden añadir otras que a la misma demostración conspiren. El objeto de la controversia es determinar la conformidad o inconformidad de la ley o acuerdo en un caso especial, reclamado con las prescripciones constitucionales; si el Poder Judicial, con conocimiento de causa juzgando, resolviera que ese acuerdo es anticonstitucional, por el mismo hecho, como necesaria consecuencia del artículo 126 de la Constitución, él quedaría nulo y de ningún valor por lo relativo al caso objeto de esta controversia: *absolutely null and void, as being against the constitution*, como dicen los publicistas americanos exponiendo estas importantísimas teorías del derecho público, que es común a nosotros y a ellos. Ahora bien; si el acuerdo aquí reclamado se ejecutase antes de la sentencia que dirima la controversia, ante la consumación de un hecho irreparable, esa sentencia sería del todo impotente; ante la desorganización del poder constitucional en Querétaro, la nulidad del acuerdo anticonstitucional no pasaría de una palabra sin significación en la esfera de la realidad. La destitución de un gobernador, la perturbación del orden político, el triunfo de un litigante sobre el otro, serían hechos tangibles, y la nulidad del acuerdo del Congreso, en cuya virtud todo eso se hiciera, apenas sería una fórmula de la sentencia, que jamás podría impedir que actos consumados no hubiesen existido.

Para que el objeto de la controversia se alcance, para que el precepto de la Constitución se satisfaga, es preciso, si no siempre, sí al menos cuando la urgencia, cuando la naturaleza de la ley o acuerdos reclamados lo demandan, que ellas queden suspendidas en su ejecución, mientras el Poder Judicial federal no resuelva sobre su constitucionalidad o anticonstitucionalidad. Porque ocasiones, y muchas hay, en que la ejecución de una ley se consuma con hechos tan irreparables, que imposible de toda imposibilidad es volver las cosas al estado que tenían

antes de aquella ejecución, a fin de que la declaración de nulidad de la ley fuera alguna otra cosa, que no un sarcasmo al precepto constitucional, que no una burla al sentido común. Tan claros como la evidencia refuto estos conceptos.

La República vencida, modelo de donde nuestra Constitución se tomó, aspirando para México el grado de prosperidad a que aquel pueblo feliz ha llegado, así ha entendido y así ha aplicado su precepto constitucional: ni se comprende cómo pudiera ser de otra manera. Desde el año de 1791 una ejecutoria resolvió que no se cumpliría por el Poder Judicial una ley que le daba atribuciones no judiciales, y el cumplimiento de la ley, suspenso primero, le fue negado después cuando se resolvió que esta ley era anticonstitucional y, por tanto, nula y de ningún valor. Desde entonces en aquellos tribunales ha quedado inviolable la práctica, como la razón pura lo exige, de no prejuzgar una controversia en que de la constitucionalidad de la ley se trata, permitiendo que se consumen hechos cuya irreparabilidad hiciera ilusoria la nulidad que después se declarara contra la ley anticonstitucional.

Agravio haría a la ilustración de esta muy respetable sala, si registrando los anales judiciales de los Estados Unidos, le citara una y otra ejecutoria, en que en respeto de la Constitución se ha mandado suspender el cumplimiento de la ley de anticonstitucional acusada, hasta que se resuelva si lo es o no. La pura razón persuade de que dejar consumar un acto irreparable para después llenar el deber constitucional de declararlo nulo, es hasta insensatez, si no se quiere a eso llamar violación de ese deber, infracción de la Constitución.

Si bien es cierto que no tenemos ley orgánica que en precepto legal convierta esa exigencia de la razón, y de la filosofía del artículo 98 no faltan en nuestra reciente legislación constitucional precedentes que con provecho se pueden citar para sostener las teorías que he estado fundando, no pudiendo los tribunales dejar de administrar justicia so pretexto de silencio, insuficiencia u oscuridad de la ley, y teniendo en tales casos que juzgar, o bien por la analogía la equivalencia de la razón o bien buscando el solo auxilio de la filosofía del derecho, como con abundancia de argumentos lo prueban no sólo los publicistas, sino los

comentadores de nuestro derecho civil. Véase entre otros, Escriche (Dic. verb. Arbitrio judicial, al fin. Interpretación auténtica, juez, párrafo XII, etc., etc.); de mucho sirve invocar esos precedentes análogos a que me estoy refiriendo.

La antigua y la vigente ley orgánica del artículo 101 de la Constitución determinan (art. 40 de la ley de 20 de noviembre de 1864 y 3 de la ley de 20 de enero último): que en caso de urgencia notoria el juez suspende el acto o providencia que motiva la queja. Las razones que esa suspensión exigen, son iguales, idénticas, a lo que yo alego para sostener lo que estoy pretendiendo. Esa suspensión, en el caso de aquellas leyes, tiene por objeto conservar la materia del juicio, impedir que sus efectos sean ilusorios. ¿Qué garantía individual podría ampararse en el condenado a muerte por virtud de una ley anticonstitucional, si el juez no pudiera suspender el cumplimiento de esa ley?

Iguales, idénticas, pero más graves aún, son las razones que en casos como el presente demandan la suspensión en el cumplimiento de la ley, sobre cuya constitucionalidad se disputa; iguales, porque como ella, la suspensión es indispensable para conservar la materia del juicio; idénticas porque así como allá ninguna garantía de la vida se puede amparar en un ajusticiado, así aquí ninguna controversia es posible cuando la ejecución de la ley importa actos tan irreparables como la pena de muerte; y más graves, en fin, porque allá no se trata más que del interés privado, más que de una garantía individual, y aquí la cuestión versa sobre los derechos políticos de todo un estado y delicados y gravísimos intereses de todo el orden constitucional.

Y si un juez de distrito puede suspender en un caso dado la ejecución de una ley, cuando las garantías de un individuo lo exigen, ¿no podrá el primer tribunal de la nación decretar la suspensión de un acuerdo cuando la naturaleza del juicio, la filosofía del precepto legal, los intereses políticos de un estado y hasta la conservación del orden constitucional de consuno lo exigen? —en falta de ley orgánica del artículo 98 ¿no bastará la analogía, la igualdad de razones, para fundar esa suspensión en el texto de aquellas leyes que de casos semejantes se ocupan?

Podría ampliar mis razonamientos invocando la fracción I del artículo 97 de la Constitución que faculta al Poder Judicial federal para conocer de las controversias que se susciten sobre cumplimiento de las leyes federales, y conciliando ese precepto con el del artículo 98 y el de 126 deducir de su legal concordancia, que no puede esta Sala, sino violando la Constitución, permitir que se cumpla irreparablemente un acuerdo reclamado como anticonstitucional, antes que una sentencia no lo absuelva de esa imputación. Podría sostener que el repetido acuerdo, además de infringir el artículo 116 de la Constitución, conculcando la independencia de los estados, violó también las fracciones VI, y XIII del artículo 85, invadiendo las atribuciones del Poder Ejecutivo de la Unión, convirtiendo al Congreso en autoridad administrativa, haciendo de la fuerza pública un juez ejecutor, y podría yo sostener todo esto con el fin de poner en tangible evidencia la anticonstitucionalidad de aquel mal inspirado acuerdo. No lo haré así porque el tribunal a quien me dirijo no necesita en su ilustración de mis demostraciones, como porque el ciudadano procurador general de la nación acaba de poner en brillante luz algunos de esos importantísimos puntos de nuestro derecho constitucional en la interesante publicación que ha hecho sobre este ruidoso asunto.

Creo que lo dicho es bastante para fundar mi petición legalmente; si la materia que he tratado no está ni con mucho agotada, no a mi insuficiencia, sino a la sabiduría de este tribunal toca apoyar en más razones todavía la justicia de una resolución que será el glorioso monumento que dé testimonio de que el orden constitucional es ya una verdad en la República, de que ya entre nosotros "habla la ley y callan las armas", de que la imparcialidad y justificación de un tribunal, y no la pasión y exigencia de los partidos, resuelven en razón, y no por la fuerza, las cuestiones de que depende la paz del país, la consolidación y prestigio de las instituciones, la prosperidad nacional.

Por las consideraciones, pues, que dejo expuestas, pido respetuosamente a la sala, que teniendo este escrito como parte integrante

de mi demanda, se sirva, antes de todo trámite y mientras en la actual controversia no se pronuncia la sentencia definitiva, mandar suspender la ejecución de los acuerdos del Congreso de la Unión de 8 y 31 de mayo próximo pasado, sirviéndose luego comunicar, por la urgencia del caso, esa resolución al Poder Ejecutivo, para que surta sus debidos efectos.

Así es de justicia que pido, protestando lo necesario.

México, agosto 11 de 1869.

EL GOBERNADOR DE QUERÉTARO
INDIGNADO POR CALUMNIAS

Querétaro, octubre 1º de 1869

Sr. Presidente Lic. don Benito Juárez
México

Señor de mi atención y respeto:

Intencionalmente había dejado de escribir a usted, temeroso de distraerlo de sus altas atenciones y de que se pudiera acaso interpretar mal mis relatos en la cuestión que, por desgracia, agita hoy al estado. Temí que pudieran atribuírseme aspiraciones indignas y, por lo mismo, hice uso del silencio, dejando a las leyes, a usted y al tiempo, la solución de tan enojoso asunto.

Hoy, que ha llegado a mí, noticia —acaso no sea exacta— que el Sr. Zenca ha informado a usted que yo tengo y he tenido conferencias con el Sr. Negrete, con objeto de trastornar el orden y la paz, cumple a mi deber de caballero y hombre leal, protestar a usted, por medio de esta carta autógrafa, ser la más grosera calumnia y que, sólo por tratarse del individuo particular, levanto mi voz para desmentir tan inicua acusación fraguada acaso por las personas que gratuitamente son mis enemigos en la cuestión que nos divide, porque jamás han tenido motivo para serlo, y sólo el encono de las pasiones puede precipitar a ese terreno a hombres de sensatez y reposo, lastimando el honor del que ha procurado no desmentir la conducta que he observado desde el principio de mi carrera.

Puede usted, señor Presidente, estar seguro de mi lealtad y que, cualquiera que sea el resultado de la cuestión que se discute, el gobierno no tendrá que reprocharme el trastorno del orden sino, antes bien, tendrá

por mi parte toda la sumisión y respeto a la ley. Jamás, señor, haría que en mi hoja de servicios apareciera una mancha en mi carrera y que quitara el único antecedente por el que he merecido la condecoración de mis superiores.

Muy reconocido estoy, señor, por la protección que, sin méritos, se ha dignado usted dispensarme; bien comprendo que si no he descendido del lugar que ocupo, es debido a la bondad de usted y, por lo cual, mi gratitud es inmensa.

Perdone usted lo haya distraído, rogándole tenga la bondad de aceptar el respeto que profesa a usted su inútil y atento servidor q. s. m. b.

Julio M. Cervantes

EL GOBERNADOR DE QUERÉTARO
A PUNTO DE DEJAR EL MANDO

Querétaro, octubre 24 de 1869

Sr. Presidente Lic. don Benito Juárez
México

Muy señor mío y de mi especial aprecio:

Ha llegado nuevamente a mi conocimiento que mis enemigos no descansan y que después de haber procurado en el Congreso que se me declarara culpable, se esfuerzan en arrebatarme mi crédito, informando a usted que es mi intento sublevarme contra el gobierno. Lejos de mi espíritu ha estado siempre semejante propósito, por más que la injusticia y la calumnia me hayan herido profundamente. Sé distinguir entre la mano de mis enemigos y la del gobierno; si bien los primeros han tendido siempre a nulificarme, debo al segundo todo género de consideraciones y nunca contribuiré a que caigan sobre éste las consecuencias de la culpa de aquellos.

Bien comprendo, también, que un partido político ha procurado mi ruina y hacer de mí una víctima para despertar los sentimientos de venganza y bien lo comprendo, porque al paso que él procuraba mi condenación en el Congreso, pretendía impulsarme a la rebelión. He menospreciado estas sugerencias porque nunca me prestaré a ser instrumento de pasiones cuya única condición de ser es la ambición personal. Se me ha querido sacrificar para buscar un opositor al gobierno. No me ha condenado mi culpa, porque ninguna he tenido, sino la esperanza de que me lanzara en la vía de los motines.

Los que así pensaron, no contaron con mi lealtad. No deseo que usted tenga de mi parte dificultades ni tropiezos de ningún género; así lo he pensado siempre, así lo he dicho a usted con anterioridad y hoy, que llega el momento que se me recuerden mis palabras, no retrocedo ante el cumplimiento de mis promesas.

Se me ha indicado que el estado de sitio sería una solución satisfactoria. Si así fuere, no vacilo en aceptarlo, y tengo la íntima convicción de que todo el estado de Querétaro lo aceptará también hasta con agrado. De la misma manera que acepto el estado de sitio, aceptaré cualquiera otra solución que convenga a las miras del gobierno. Con este objeto envío a mis defensores pliego en blanco, con mi firma y la del secretario, para que proceda de la manera que sea conveniente. Es la prueba que puedo dar a usted de mi sinceridad y de que nunca me separaré de la línea que me señalan el deber y mi adhesión personal al Gobierno Supremo.

Únicamente deseo hacer a usted la súplica de que se me evite tener que entregar el mando a mis enemigos políticos. Creo que hay razón para evitarlo, porque está pendiente de resolución en la Suprema Corte el punto sobre el carácter que pretende tener el gobernador nombrado por la Legislatura. Si además de esto fuera lícito que se dieran instrucciones al jefe que gobernará a Querétaro durante el sitio para que no hiciera modificaciones en el personal de la administración, mucho lo estimaría de usted. No dudo que mis enemigos querrán hacer víctimas a los empleados, cuya única culpa es haber sido leales conmigo y haber cumplido con su deber; yo desearía que, en cuanto es posible, esos empleados no tengan una destitución por premio de su lealtad.

Espero las órdenes de usted, como su afectísimo amigo y servidor
q. b. s. m.

Julio M. Cervantes

EL GOBERNADOR CERVANTES
AGRADECIDO DE LA OPINIÓN DE JUÁREZ

Querétaro, octubre 24 de 1869

Sr. Presidente de la República,
Lic. don Benito Juárez
México

Señor de mi especial aprecio y consideración:

Después de las impresiones desagradables que recibí con la noticia del veredicto que me declaró culpable, ha sido de mucho consuelo para mi situación, la visita que me ha hecho el Sr. Acosta, asegurándome que en nada ha cambiado el buen concepto que usted tiene de mí y la confianza que le inspira mi conducta.

Si no temiere distraer a usted de sus muchas atenciones, me extendería en ésta para demostrarle los fundamentos en que puede apoyar el gobierno la seguridad de que jamás seré yo el que le cree dificultades en su administración. El mismo Sr. Acosta, con quien he tenido dilatadas conferencias, podrá, en lo verbal, dar dichos informes. Tan sólo me limito a decir a usted que deseo probar a mis enemigos que aspiro a una gloria más noble que la adquirida en los motines populares y en los pronunciamientos; que descenderé tranquilo al banquillo del acusado, dando ejemplo de respeto a la ley y que si soy separado absolutamente del puesto que ocupó, deseo que el estado de Querétaro me vea pacífico en la vida privada y no olvide que sólo procuré sacrificarme por conservar sus derechos sagrados, pero que jamás conduje a sus hijos a un abismo, empuñando la bandera de la rebelión.

He entregado al Sr. Acosta pliegos con mi firma en blanco, para que mis defensores dirijan este asunto de la manera que les parezca más conveniente. En esto creo dar al gobierno la mejor prueba de buena fe y de que sólo estoy animado del deseo más puro en favor de la paz y tranquilidad de mi patria que tanto amo.

Cualquiera que sea la resolución que ponga término a nuestras dificultades, como ella salve la dignidad del estado de Querétaro, la aceptaré gustoso. No pretendo ni indicarla, porque podría hacerlo en el sentido que sólo satisficiera mis pasiones. Me entrego enteramente a los hombres de fe, de patriotismo y de conocida ilustración, porque estoy seguro que ellos, como usted, me aprecian sinceramente y no me dejarán perecer en tantas dificultades como han creado mis enemigos o los del gobierno, para convertirme acaso en instrumento de miras rastreras y de venganzas innobles. Estoy tranquilo y así espero los nuevos acontecimientos, dedicado exclusivamente a conservar en el estado la paz, como el supremo de los bienes.

Deseo se conserve usted sin novedad y mande a su afectísimo y sincero amigo que lo respeta y b. s. m.

Julio M. Cervantes

SENTENCIA QUE PRONUNCIÓ
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ERIGIDA EN JURADO
EN EL CASO DEL CORONEL CERVANTES

En la ciudad de México a los veinte días del mes de noviembre de 1869; reunidos en la sala de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos los CC. presidente Ogazón, ministro Riva Palacio, Lafragua, Ordaz, Ramírez, Cardoso, Castillo Velasco, Auza, Guzmán (L.), Velázquez, Zavala, García, fiscal y procurador general, con el objeto de erigirse en jurado de sentencia para pronunciar la correspondiente en la causa seguida al coronel don Julio María Cervantes, gobernador constitucional del estado de Querétaro, por infracción de los artículos 17, 41 y 106 de la Constitución federal, de cuya información estimó culpable el Congreso general, erigido en jurado de acusación, al referido don Julio María Cervantes, por considerar probado, primero: que el ciudadano gobernador y sus agentes ejercían violencia sobre la mayoría de los ciudadanos diputados de la Legislatura de Querétaro por medio de hechos reprobados y escandalosos. Segundo: que estos hechos fueron promovidos por los agentes del gobierno y aun por el gobernador mismo, quien mandó a sus agentes condujeran a su presencia a su acusador el ciudadano diputado Próspero Vega, el día 30 de abril del presente año; y tercero: que careciendo de garantía los ciudadanos diputados para la seguridad de sus personas, a consecuencia de las agresiones de que, eran objeto; de todo lo que resulta, como se expresa la Sección del Gran Jurado de acusación, que el gobernador de Querétaro don Julio María Cervantes ha violado el artículo 17 de la Constitución federal, ejerciendo violencia contra la Legislatura del mismo estado para suspender los efectos de la acusación entablada contra su persona.

Que ha violado igualmente el artículo 41 del mismo Código impidiendo el ejercicio de las funciones del Poder Legislativo de dicho estado.

Y, por último, que ha violado también el artículo 109 de la misma Constitución, alterando con su conducta en el estado de Querétaro la forma de gobierno constitucional y representativo popular.

Hecha relación del proceso en audiencia pública, oído el pedimento del ciudadano fiscal y los informes del ciudadano Lic. Ezequiel Montes como acusador y de los ciudadanos defensores Lics. Rafael Dondé e Ignacio L. Vallarta, y considerando en cuanto a la pena que debe imponerse al culpable.

Primero. Que el jurado se ve en la precisa obligación de pronunciar sentencia condenatoria, supuesta la declaración de culpabilidad hecha por el Congreso de la Unión erigido en jurado y la consignación del reo.

Segundo. Que aunque no se ha dictado una ley especial orgánica emanada de la Constitución de 1857 que gradúe los delitos oficiales y sus penas, hay la necesidad de imponer alguna, una vez pronunciado por el jurado de acusación el veredicto de culpabilidad.

Tercero. Que si bien no queda al arbitrio judicial la facultad de crear delitos por la analogía de los hechos, que están calificados por la ley como criminosos, con los que no tienen para ella esa calificación, sí está en el arbitrio judicial imponer penas por hechos declarados criminosos por la ley, cuándo ésta no la designa y que ese arbitrio se puede considerar tanto más autorizado en el presente caso, que el Congreso de la Unión no ha creído indispensable expedir la ley penal antes de pronunciar sus veredictos de culpabilidad.

Teniendo, por otra parte, en consideración los padecimientos sufridos por el coronel don Julio María Cervantes, y haciendo uso del arbitrio judicial, el jurado de sentencia falla:

Primero. Queda suspenso por un año, de su encargo de gobernador de Querétaro, y privado por el mismo tiempo del sueldo correspondiente, don Julio María Cervantes.

Segundo. Remítanse testimonios de este fallo al Congreso de la Unión, devolviéndose el expediente al gobierno de la Unión y al del estado de Querétaro para su conocimiento y al juzgado de distrito de México para que cancele la fianza que ante él otorgó don Julio María Cervantes.

Hágase saber y publíquese. Así lo acordaron por mayoría de votos los ciudadanos magistrados que formaron el jurado de sentencia y firmaron.

Pedro Ogazón
Vicente Riva Palacio
J. M. Lafragua
P. Ordaz
Joaquín Cardoso
Ignacio Ramírez
José María Castillo
Velasco

M. Auza
S. Guzmán
Luis Velázquez
M. Zavala
José García Ramírez
L. Guzmán
Luis María Aguilar
Secretario

EL GOBERNADOR DE QUERÉTARO
PRESENTA UN SOMBRÍO PANORAMA ECONÓMICO

Querétaro, diciembre 22 de 1869

Sr. Presidente don Benito Juárez
México

Muy señor mío de todo mi respeto:

Sigue el estado conservándose inalterable, aunque por todos sus pueblos asoma un vivo deseo por integrar sus poderes locales, haciendo uso de su soberanía y gozando de su independencia constitucional.

En el distrito de Cadereyta hubo una pequeña diferencia entre los vecinos de la municipalidad de Bernal y el prefecto y juez de letras, al practicar una visita; pero amistosamente quedó aquello en familia con la más perfecta armonía.

En lo general la situación es muy violenta por la paralización de todos los giros; la pobreza pública y la crisis rentística que en emergencias como la presente, los causantes especulan con bribonada. Yo me atrevo a (suplicar a) usted no deje un momento de ver a nuestro infeliz estado con la misma benevolencia que hasta aquí y por la cual sus buenos vecinos lo saludan a usted con sincera gratitud a cada momento.

Queda invariable servidor que atento b. s. m.

Ángel Dueñas

GRAVE CRISIS POLÍTICA
EN QUERÉTARO

Querétaro, 31 de diciembre de 1869

Telegrama recibido en México, 31 de diciembre
de 1869 a las 5 y 5 minutos de la tarde

Señor Presidente de la República:

Creo con fundamento negarme a comparecer y no a declarar ante este juez de distrito, así como a entregarle los sellos del gobierno, para que obren de cuerpo de delito. Insistiré, adelantándome a que de lo contrario me arreste Contreras. El juez es enemigo de la actualidad. Mi comparecencia pudieran explotar, él con los otros, para poner más acéfalo este estado y provocar un desorden. Me he negado y consulto para no comprometer ni al estado ni al gobierno.

Ángel Dueñas

PENDIENTE DE LOS AMIGOS DE CHIHUAHUA

Chihuahua, septiembre 25 de 1869

Ciudadano Presidente Benito Juárez

Mi estimado amigo y señor de mi respeto:

Antes de ayer ha estado en esta su casa nuestro amigo don Juan Muñoz, a hacernos una visita a mí y a mi familia a nombre de usted, lo que he estimado como un recuerdo de las finas atenciones que usted nos dispensó; cuyo acto nos ha sido sumamente satisfactorio por lo que continuamos recordando las bondades de usted.

Por todos los de esta su casa le suplicamos haga presente a su señora esposa y familia la estimación con que le hemos tenido.

Yo continúo mi vejez con lepra en las piernas y con reúmas que me tienen casi tullido y no creo sobrevivir mucho tiempo, pero en mis días tendré siempre presente la fina amistad que usted me ha dispensado y que tendría mucho gusto en poderle servir a usted como su afectísimo amigo y seguro servidor.

Berardo Revilla

EL MOVIMIENTO SUBVERSIVO EN PUEBLA
NO TIENE IMPORTANCIA

Puebla, octubre 27 de 1869

Sr. Presidente don Benito Juárez
México

Muy respetable señor y amigo:

Las noticias que por telegrama comuniqué a usted, no tenían la importancia que yo mismo creí, en virtud de los informes que se me dieron. Posteriormente me he asegurado, que no es cierto el que estuviera minado algún cuerpo de la 2ª división. La conspiración sólo era tramada por esos aventureros que sirven a todos los partidos, apoyada por algunas bandas de ladrones. Todas las personas aprehendidas han sido consignadas al juez de distrito, quien conoce ya en este asunto y quien está formando la sumaria correspondiente. A él consignaré también a las demás personas que se hallen implicadas en este asunto.

Se han verificado las elecciones de diputados a la Legislatura en los distritos en que no la hubo en la época fijada por el Congreso saliente; de los 6 distritos, sólo en uno dejó de haber elección, en los otros cinco salieron amigos del gobierno. Este triunfo ha exasperado a tal grado a los dos diputados de oposición que hay en la Cámara, que han dejado de concurrir estos días, impidiendo, con su ausencia, el que haya *quórum* para admitir a los nuevamente electos. Espero que esta crisis terminará mañana.

Me repito de usted afectísimo servidor y amigo q. b. s. m.

Ignacio Romero Vargas

Nota de Juárez:

Recibió su grata 27 del que cursa y queda enterado con satisfacción de su contenido, felicitándole por el resultado de las elecciones. Sé que, según escribe el gobernador de Hidalgo, se encuentra en Puebla y hace viajes a Chignahuapan el ex-Gral. Gutiérrez, que parece es uno de los agentes de Negrete, lo que le participa para que haga lo posible por aprehenderlo.